

REPÚBLICA DE COLOMBIA**RAMA JUDICIAL****TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN****SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por OSCAR JOSÉ QUINTERO CÁRDENAS en contra de WILMAR VILLEGAS MESA (Radicado 05266-31-05-001-2017-00002-01).

ANTECEDENTES

Pretende el actor se declare que con el demandando -empleador-, sostuvo un contrato de trabajo sin término definido, ejecutado entre el 12 de diciembre de 2012 y el 23 de septiembre de 2015. En consecuencia, se le condene al pago de las obligaciones sociales (prestaciones y vacaciones), aportes al sistema de seguridad social en pensiones, indemnización por “*despido injusto*”, las sanciones previstas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, la indexación y las costas (fl 1 vto-2).

Como fundamento de dichas aspiraciones, señaló que el demandado es propietario del establecimiento de comercio *Lienzos Renacimiento Galería Marquetería*, quien lo contrató verbalmente el 12 de diciembre de 2012, para desempeñarse como operario de marquetería, con las funciones de pintar, cortar, ensamblar, enmarcar y colgar elementos en la misma galería. Durante *casi toda* la vigencia de la relación laboral, no fue afiliado al sistema de seguridad social integral, solo, cerca del finiquito del contrato, logró su afiliación a través de varios

requerimientos y solicitudes, incluso celebrando el compromiso de hacerlo ante el Ministerio del Trabajo. Dice que su empleador no canceló en forma completa las prestaciones sociales y vacaciones, y que existen ciertas prestaciones insolutas. Su último salario ascendió a \$220.000 semanal, \$880.000 mensual. Le puso fin al contrato el 23 de septiembre de 2015, por causa del incumplimiento reiterado de las obligaciones patronales (fl 1).

WILMAR VILLEGAS MENA, aceptó la existencia del contrato de trabajo, los extremos temporales y el último salario devengado. Aclaró que *“el trabajador no fue afiliado a la seguridad social cuando inició su relación laboral, pero si al poco tiempo del inicio de la misma”*, retardo que *“fue el tiempo que duró el trámite de afiliación como empleador, para él poder afiliarse a sus empleados”*. Afirmó haber pagado en su completitud las obligaciones sociales pedidas, y resaltó que era usual que el actor le solicitara adelantos sobre estas, autorizando el descuento de lo adeudado, según documental que aportó. No canceló la liquidación del último año de servicios, es decir, el transcurrido entre el 1º de enero y el 23 de septiembre, ambas fechas de 2015. Y sobre la terminación del contrato, dijo que ello ocurrió por la renuncia presentada voluntariamente por el demandante, después de presentarse de vacaciones. Se opuso a las pretensiones y propuso la excepción que denominó *inexistencia del derecho al reconocimiento y pago de las indemnizaciones consagradas en los artículos 64, 65 del CST y 99 de la Ley 50/90*, resaltando que *“el retardo en la liquidación y pago laboral no se originó en una conducta maliciosa, dañina o mal intencionada... sino en la espera que el trabajador regresara a sus labores, como fue solicitado por su empleado”* (fls 94-96).

El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, en sentencia del 2 de agosto de 2019, condenó al demandado a pagar al actor: \$1.381.474,7 por reajuste de prestaciones sociales; \$900.166,66 por reajuste de las vacaciones, única suma frente a la que dispuso la indexación; y \$20.298.399,99, por la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Absolvió de los demás pedimentos, en específico, de la indemnización por *despido injusto*, porque de lo manifestado en la carta de renuncia, dedujo que fue un acto voluntario; de la sanción del artículo 65 del CST, porque el actuar del empleador se enmarcó en los postulados de la buena fe, el efectuar abonos parciales de lo debido; y sobre

la indexación de las demás condenas, porque en su sentir, no todas las obligaciones sociales son susceptibles de ser indexadas (fl 128).

El demandante aspira a que se revoque la absolución, y en su lugar se imponga condena por *la indemnización por despido*, porque se configuró el despido indirecto ante el incumplimiento reiterado de las obligaciones del empleador, lo que está probado en el expediente; *la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST*, porque la falta de pago de la liquidación final de prestaciones, fue un actuar desprovisto de buena fe, en la medida que el demandado no acreditó ni alegó justificación alguna; *y la indexación de las prestaciones sociales, la indemnización por despido y la sanción por no consignación de las cesantías*, pues son capitales insolutos que se han depreciado con el paso del tiempo (fl 128 Minuto 54:22).

Por su parte, el demandado presentó el recurso de apelación para que se le absuelva de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Hacia ese norte, sostuvo: *“como se puede apreciar en los recibos, así como hay abonos a intereses, vacaciones, en la página 28 del expediente hay unos recibos que dicen abono a liquidación. Dice abono a liquidación, porque mi representado en vez de consignarle las cesantías, se las pagaba porque él le manifestaba que tenía necesidades, como consta en otro recibo de pago que se le realizó”* (fl 128 Minuto 1:11:42).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No existe discusión entre los litigantes sobre el contrato de trabajo que los vinculó, sus extremos temporales, y el monto del salario, pues estos elementos fueron aceptados en la contestación de la demanda (fl 94). Quedando claro a partir de los recursos verticales intentados, que la Sala debe restringir su pronunciamiento, a los siguientes problemas jurídicos: 1) Procede o no la indemnización por despido indirecto; 2) Es plausible o no fulminar condena por la sanción del artículo 65 del CST; 3) Resulta procedente o no la sanción por no consignación de las

cesantías en un fondo; y 4) Sobre cuáles pretensiones debe disponerse la indexación.

l) Del despido indirecto

Según los artículos 62 y 64 del CST, el colaborador puede poner fin al contrato de trabajo por causas imputables al empleador, que configuran justa causa de finalización del vínculo, y hacen procedente la indemnización de perjuicios tarifada por la ley en su favor. En estos eventos, según la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia, quien alega un despido indirecto debe demostrar i) la terminación unilateral del contrato, ii) que los hechos generadores sí ocurrieron y iii) que estos fueron comunicados al empleador en la carta de dimisión (Ver sentencias SL417 de 2021, SL3288 de 2018 y SL13681 de 2016).

Con esa precisión, se descende al caso, encontrando que en la primera sentencia se determinó que no había lugar a la indemnización, porque de la misiva del folio 7, se infería que la relación finalizó por renuncia voluntaria de Oscar José Quintero Cárdenas.

En ese documento, el 23 de septiembre de 2015, el demandante manifestó al demandado lo siguiente:

“... quiero por medio del presente documento presentar renuncia al cargo de operario de maquinaria, pintor y marquetería en general, que vengo desempeñando según consta en documentos elaborados por el inspector del trabajo. La causa de mi renuncia es por el incumplimiento y falta de garantías ya que no se me cancelado (sic) o consignado el total de mis cesantías ni ningún parafiscal, ni afiliación ninguna EPS seguro, pues estando enfermo me tocó de mi bolsillo pagar médico particular y drogas... Pido en mi retiro voluntario mi liquidación completa exigida por la ley”.

Como se observa, es verdad que, en la parte final del escrito, el trabajador indicó que su retiro era voluntario. No obstante, de la redacción utilizada, es claro que la motivación de esa decisión, se forjó ante el incumplimiento reiterado del demandado de sus deberes de consignar las cesantías, y afiliarlo a una EPS, situación que se enmarca en la justa causa prevista a favor del empleado para finalizar el contrato de trabajo, en el numeral 6, literal B, del artículo 62 del CST:

“El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del {empleador}, de sus obligaciones convencionales o legales”.

Esos incumplimientos reiterados, se encuentran suficientemente demostrados, pues el propio empleador al contestar la demanda aceptó no haber consignado las cesantías en un fondo durante toda la vigencia de la relación laboral, y no allegó al expediente constancia de la afiliación de su subordinado al sistema de seguridad social en salud, solamente se aportaron las certificaciones de afiliaciones a Colpensiones, ARL, y Caja de Compensación, lo que ocurrió tan solo durante junio y agosto de 2015, concomitante con la vista que hiciere el Ministerio del Trabajo al establecimiento de comercio (fls 13, 18, 22, 24, 34, 100 y 101). Ante esa desatención de los deberes sociales, el patrono ninguna justificación alegó ni comprobó, escenario en el que ha de comprenderse el incumplimiento sistemático y sin razones válidas de sus obligaciones legales.

Bajo esos presupuestos, contrario a lo sostenido por el *a quo*, y como lo sugirió la censura del polo activo, en este evento sí procede la indemnización por despido indirecto, se probó la terminación unilateral del contrato, los hechos generadores de la determinación tomada por el trabajador, y la comunicación de los mismos al empleador. Luego, habrá lugar a revocar la absolución proferida en primera instancia, para en su lugar ordenar al demandado pagar a su ex trabajador, por concepto de la indemnización de que trata el artículo 64 del CST, \$1.922.799; equivalente a 30 días de salario por el primer año completo, 20 días de salario por el segundo año completo, y la proporción igual a 15,55 días de salario por los 280 días laborados en el tercer año incompleto.

II) De las sanciones moratorias artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST.

La jurisprudencia nacional ha sostenido de manera reiterada y pacífica que no son de imposición automática; dado su carácter sancionatorio, es preciso auscultar la conducta asumida por el deudor, en aras de verificar si existen razones serias y atendibles que justifiquen su conducta omisiva y lo ubiquen en el terreno de la buena fe (ver SL15507-2015, entre otras). La buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del empleador de creer estar actuando conforme a derecho (Ver SL 1439 de 2021); por ello es tendencia

actual, predicar que estas sanciones operan cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta, quedando claro que no existen reglas absolutas que objetivamente determinen la buena fe (ver SL3824 de 2020).

Con esas aclaraciones, se retoman las particularidades del asunto, hallando que ningún argumento atendible y razonable se esbozó por el demandado para justificar la no consignación de las cesantías en un fondo en las fechas que debía hacerlo, solo se aludió -y se insiste en ello en la censura-, a que hizo abonos sobre ellas entregados directamente al trabajador, lo que demuestra en contrario, que siempre supo deber dicho auxilio y aun así no se allanó a su pago en los términos de ley, por eso, hizo bien el *a quo* en imponer la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dado que su actuar respecto de este derecho prestacional, no puede encuadrarse de manera razonada en la buena fe.

En cambio, en lo relativo a la moratoria del artículo 65 del CST, estuvo bien que se absolviera de ella, dado que las colillas de pago que aportó el demandante en los folios 28 a 32, demuestran que el demandado sí realizaba los pagos oportunos de prestaciones tales como primas de servicio, intereses a las cesantías y vacaciones, de acuerdo al salario devengado por el trabajador, entonces esa actitud del accionado en ningún sentido puede encuadrarse en la mala fe, si bien omitió liquidar los últimos siete meses de la relación laboral, lo cierto es que no lo hizo con el ánimo de defraudar los derechos laborales, incluso es de anotar que aquél acudió al proceso afirmando que así ocurrió y aceptando no solo la existencia del contrato, sino también sus extremos y el salario, elementos de donde se infiere que su querer al omitir la liquidación final no fue malintencionado; en ese marco, la apelación de la accionante sobre este punto, no prosperará, de tal modo que lo decidido en primera instancia sobre estas sanciones, se confirmará.

III) De la indexación.

El paso del tiempo en economías inflacionarias como las de este país, hace que el dinero pierda su poder adquisitivo, y la forma de corregir dicha pérdida es a

través de la corrección monetaria o indexación. Todo capital que se adeude y haya debido pagarse en otrora, debe ser actualizado, pues solo de esa forma se garantiza que el acreedor reciba lo que se le adeuda en su justo valor. Este es un hecho notorio, por lo que la indexación puede incluso otorgarse de oficio, sin necesidad de petición de la parte (ver sentencia SL359 de 2021).

En el caso, el demandante la solicitó respecto de las pretensiones de pago de prestaciones sociales, vacaciones, la indemnización por despido indirecto y la sanción por no consignación de las cesantías (fl 87). Esos capitales, debieron ser cubiertos en una fecha, por mucho anterior, a la data en que se impone la obligación, argumento suficiente para imponerla sobre las cantidades a las que se condenó, aclarando que esta corrección monetaria en el caso de la sanción por no consignación de las cesantías, principiará al día siguiente de la finalización del contrato de trabajo, dado que hasta ese momento se causó la moratoria aludida, es decir, a partir del 24 de septiembre de 2015; los demás elementos se actualizarán desde el momento en que debieron cancelarse; llevando la corrección monetaria de todos los capitales hasta la data en que se satisfaga totalmente la obligación. Para el efecto deberá emplearse la siguiente formula:

$$\text{ÍNDICE FINAL} / \text{ÍNDICE INICIAL} \times \text{CAPITAL} - \text{CAPITAL} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

En síntesis, prospera parcialmente la apelación del demandante en cuanto a la procedencia de la indemnización por despido indirecto y la indexación, en atención a lo explicado, se revocará parcialmente y modificará el fallo gravado en estos aspectos. No prosperó la apelación del demandado, ante la evidente causación de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aspecto en el que se confirmará lo decidido por el juez de conocimiento.

Finalmente, siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP numeral 5, sin costas en esta instancia.

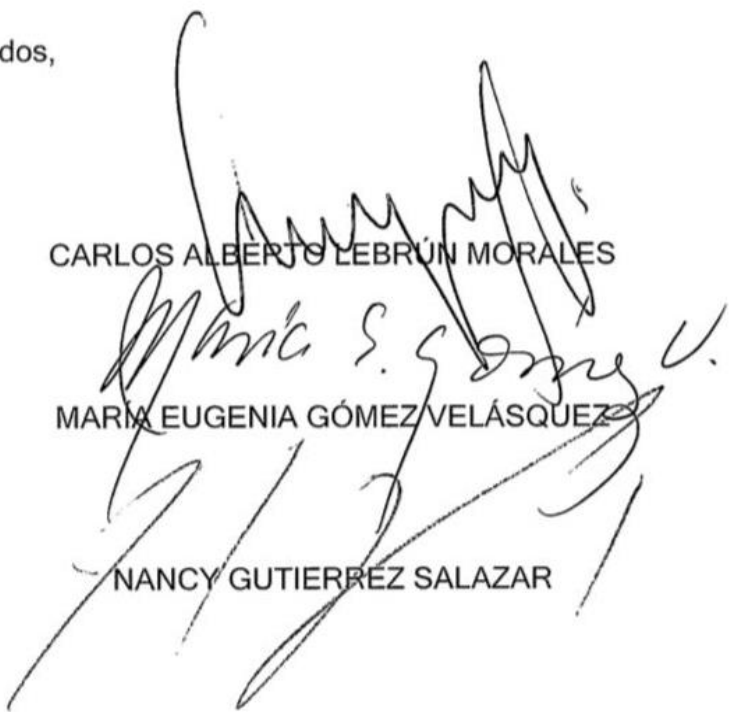
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA PARCIALMENTE** la sentencia recurrida en cuanto absolvió de la indemnización de que trata el artículo 64 del CST. En su lugar, **CONDENA** a WILMAR VILLEGAS MESA a pagar a OSCAR JOSÉ QUINTERO CÁRDENAS, \$1.922.799 por este concepto. **MODIFICA** la condena a la indexación, para incluir como elementos a actualizar bajo la fórmula descrita en la parte motiva, los capitales por prestaciones sociales, vacaciones, indemnización por despido indirecto, y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ésta última a partir del 24 de septiembre de 2015, como se explicó en las consideraciones. Se **CONFIRMA** en lo demás el proveído materia de los recursos de apelación.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 113 fijados el 30 de junio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.